



CT/01967/2023

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CON MOTIVO DE LA CLASIFICACIÓN CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR EL ÁREA EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 330017123007039.

Antecedentes

- I. Con fecha 08 de septiembre de 2023, fue presentada una solicitud de información pública mediante el sistema electrónico denominado Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual le fue asignado el número de folio al rubro citado, misma que se describe a continuación:

Descripción clara de la solicitud de información.

"...

1) Solicito los oficios firmados por el subdirector de recursos materiales y servicios de la dirección normativa de administración y finanzas del periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2022.

..." (sic)

- II. La Unidad de Transparencia, de conformidad con el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIIP), turnó la solicitud de información pública a la **Dirección de Administración y Finanzas** (en lo sucesivo **DAF**), para que en el ámbito de su competencia atendiera la misma.
- III. El 06 de octubre de 2023, la **DAF** solicitó la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información pública, citada al rubro.
- IV. En la misma fecha de 06 de octubre de 2023, el Comité de Transparencia, de conformidad con el artículo 135 de la LFTAIIP, así como del Numeral Vigésimo Octavo de los Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, confirmó la solicitud de ampliación del plazo de respuesta requerido por el área responsable.
- V. Con fecha 16 de octubre de 2023, la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, otorgó respuesta a la solicitud de información pública, misma que en su parte sustantiva refiere lo siguiente:

"...

En el ámbito de competencia de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, en mi carácter de enlace de transparencia de dicha Subdirección, y después de realizar la consulta a la Jefatura de Servicios que por sus funciones pudiera contar con la información, y de la búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos, realizada por personal adscrito a la misma, se desprende lo siguiente:

De acuerdo con la modalidad requerida por el peticionario "copia simple", la información está contenida en 1,345 hojas, por lo que su reproducción se realizará previo pago de derechos.

Cabe señalar que la información contiene datos susceptibles a clasificarse como confidenciales, tal es el caso del RFC y domicilio de servidores públicos; marca, modelo, número de serie, número

CT/01967/2023



de motor y número de placas de vehículos de servidores públicos y de terceros (particulares); nombres y número de identificación de terceros; correo electrónico de personal de empresas, ello con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dado que corresponden a información relacionada con datos personales.

Asimismo, número económico, marca, submarca, tipo, modelo, número de placas y número de serie de vehículos arrendados, así como nombre de la institución bancaria y número de cuenta del proveedor, ello con fundamento en el artículo 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dado que corresponde a información relacionada con el patrimonio del proveedor.

Por otra parte, el oficio DNAYF/SRMyS/303/2022 contiene información reservada, tal es el caso del número de elementos de seguridad distribuidos en diversos inmuebles del Instituto, ello de conformidad con el artículo 110 fracción V y VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que la citada información corresponde a las características del servicio prestado por los elementos de seguridad, lo que vulnera la seguridad del personal que labora en los inmuebles del Instituto, así como de los derechohabientes que hacen uso de las instalaciones, y los expone a posibles actos delictivos, dado que si esa información se da a conocer, personas ajenas pudieran hacer mal uso de ellas ocasionando inclusive la disminución de la reacción de los elementos de seguridad, en el caso de repeler la comisión de un delito. Dado de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Federal citada, se reserva la información por un año, ello de acuerdo a la prueba de daño adjunta.

Por lo antes expuesto, agradeceré su valioso apoyo para que se realicen las gestiones necesarias ante el Comité de Transparencia de este Instituto, con el objeto de que resuelva sobre la clasificación de la información antes citada. Lo anterior, de conformidad al artículo 65, fracción II de la Ley Federal de referencia.

..." (sic)

Prueba de daño.

Para la atención de la presente solicitud de información se pondrá a disposición del peticionario los oficios firmados por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios por el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2022, de los cuales se desprende que el oficio DNAYF/SRMyS/3032/022 de fecha 22 de febrero de 2022 contiene información reservada, misma que corresponde al número de elementos de seguridad distribuidos en diversos inmuebles del Instituto, ello en términos de lo señalado por el artículo 110, fracciones V y VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por los numerales vigésimo tercero y vigésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Dicha información vulnera la seguridad del personal que labora en los diversos inmuebles, así como de los derechohabientes que hacen uso de las instalaciones, y los expone a posibles actos delictivos, toda vez que si esa información se da a conocer, personas ajenas pudieran hacer mal uso de ellas ocasionando inclusive la disminución de la reacción de los elementos de seguridad, en el caso de repeler la comisión de un delito.

Por ello, y atendiendo a la solicitud del peticionario, la clasificación de la información debe atenderse conforme a los siguientes razonamientos:

A. El artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que se considera información reservada, la siguiente:

CT/01967/2023



Capítulo II

De la Información Reservada.

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

A. Por su parte, el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establece:

Vigésimo Tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Bajo tales consideraciones, resulta evidente que en el caso concreto se actualizan los elementos antes descritos, ya que si la información se diera a conocer se revelaría el número de elementos con los que cuentan los inmuebles, que darían cuenta de la capacidad de reacción de los cuerpos de seguridad, lo cual pondría en peligro la vida e integridad de los mismos elementos, así como de los servidores públicos que laboran en las instalaciones, respecto de las cuales tienen la encomienda de realizar sus labores de vigilancia.

B. Ahora bien, para la aplicación de la Prueba de Daño, esta área se constriñe a lo señalado por el artículo 104 de la Ley General, mismo que establece lo siguiente:

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Supuestos que son debidamente justificados en atención a los siguientes razonamientos:

I. Se considera que se actualizaría un riesgo real, demostrable e identificable en términos del artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que al proporcionar dicha información se revelaría datos sustantivos de los cuales se identificarían las capacidades de operación y reacción de los elementos de seguridad, lo que podría vulnerar políticas de seguridad en las que se vislumbran objetivos, estrategias y acciones con las que cuentan las corporaciones de seguridad con las que el Instituto actualmente contrata el servicio, poniendo en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, así como a los propios elementos de seguridad y al personal que acude a laborar en dichos establecimientos, toda vez que su divulgación permitiría que miembros de la delincuencia o determinados grupos decidieran atentar contra la seguridad de este tipo de instalaciones y las personas que en ellas se encuentran y tener acceso de manera más sencilla sobre la forma de organización de las corporaciones de seguridad, y con ello anticiparse a las acciones que ejecute.

CT/01967/2023



II. Ahora bien, el perjuicio que representa su divulgación consiste en que al haberse dado a conocer la capacidad de acción de los elementos que integran las corporaciones de seguridad, se brindarían pautas para aquellos interesados en promover la ineficacia del sistema de vigilancia con que se opera en el Instituto, afectando las capacidades operativas de ese cuerpo ante la amenaza a la seguridad de cualquier persona, con el objeto de atentar contra la integridad y seguridad de las personas, además se facilitaría a los grupos de la delincuencia organizada para que pudieran realizar cualquier acto para atentar contra la vida, salud e integridad de las personas, aunado a que permitiría identificar datos estratégicos de dichas corporaciones relativos a la seguridad de las personas.

III. En consecuencia a lo anterior y de conformidad con el principio de proporcionalidad la clasificación de reserva invocada tiene como fin legítimo la protección de la vida, seguridad o salud de una persona física, es decir, la afectación que podría traer la divulgación de la información requerida, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su reserva, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al derecho a la salud, la seguridad y la vida de las personas, que acuden a las unidades médicas, las personas que laboran y los propios cuerpos de seguridad.

C. El artículo 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que se considera información reservada, la siguiente:

Capítulo II

De la Información Reservada.

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

D. Asimismo, el numeral Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establece:

Vigésimo Sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben actualizarse los siguientes elementos:

- I. Lo existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
- II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
- III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

Cabe puntualizar que, de conformidad con lo previsto en los lineamientos generales, para poder clasificar la información por la causal establecida en la fracción VII del artículo de referencia, por obstruir la prevención de los delitos se debe vincular la afectación a las acciones

CT/01967/2023



implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos, mientras que para hacer referencia la obstrucción a la persecución de los delitos debe acreditarse, se debe contar con:

- a) La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite.*
- b) El vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso. y*
- c) Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.*

De este modo, es dable retomar que por cuanto hace a prevención y persecución son conceptos diferentes pues, en el asunto que nos ocupa, el primero se refiere a evitar la comisión de delitos, mientras que el segundo se invoca una vez constituida la conducta ilícita.

Ahora bien de la revisión a los oficios que se pondrán a disposición del peticionario se logró advertir que uno de ellos presentan información relativa a la prestación del servicio de vigilancia en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que con el hecho de dar a conocer la información que nos ocupa se podrían vulnerar estrategias tomadas por parte de las corporaciones de seguridad que actualmente prestan el servicio de vigilancia, con el objeto de velar por la integridad y seguridad de personas que se encuentren en el lugar objeto de la encomienda, para así evitar la posible comisión de un delito.

Es entonces, que, conforme a la naturaleza de las corporaciones de seguridad, en concatenación con los datos a salvaguardar de los oficios requeridos, es de advertir que difundir la información incrementa sustancialmente la posibilidad de que aquel que conozca dicha Información cometa algún ilícito, accediendo de forma no autorizada, a las instalaciones del Instituto, por lo que se verían menoscabadas y reducidas las acciones encaminadas a prevenir ilícitos.

En esa tónica, es que se concluye que dar a conocer la misma facilitaría que personas interesadas, perturben la prevención de los delitos por parte de la corporación de seguridad en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

A. Para la aplicación de la Prueba de Daño, se considera lo señalado por el artículo 104 de la Ley General, mismo que establece lo siguiente:

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- I. La divulgación de la información represento un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supere el interés público general de que se difunda, y*
- III. La limitación se adecue al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

Supuestos que son debidamente justificados en atención a los siguientes razonamientos:

- I. El riesgo real, demostrable e identificable consiste en que si se llegarán a revelar los datos sustantivos del oficio que nos ocupa, podría ocasionar que personas ajenas puedan hacer mal*

CT/01967/2023

uso de dichos datos, realizando el análisis de los mismos con el objeto de cometer un delito, lo que generaría un riesgo potencial de seguridad de las instalaciones que vigila dicho cuerpo de seguridad.

II. Así también el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación es que un mal manejo de dicha información podría evitar que los elementos de las corporaciones de seguridad puedan de manera eficaz repeler la comisión de delitos que se pudieran desarrollar en las instalaciones del Instituto.

III. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la clasificación como reserva, tiene como fin legítimo la prevención de delitos que pudieren ser cometidos, es decir, la afectación que podría traer la divulgación de la información requerida, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su reserva, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al derecho a la protección de las personas, es decir, es evitar la comisión de ataques o cualquier delito que intente ser cometido por cualquier grupo o miembro de la delincuencia organizada.

En atención a los razonamientos planteados, y visto que la información solicitada vincularía a determinadas personas y con el hecho de divulgarse pondría en riesgo la vida y la seguridad de las personas, así como podría obstaculizar la prevención de los delitos se clasifica como reservada la información referida, por un período de un año, siendo éste periodo el idóneo dada la naturaleza de la información; ello sin menoscabo de que pueda desclasificarse en caso de que se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por todo lo anterior, se solicita atentamente al Comité de Transparencia del Instituto confirme la reserva de la información materia de la presente prueba de daño, requerida a través de la solicitud de información número 330017123007039.

...” (sic)

Adicionalmente, la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, puso a disposición la siguiente información:

- **Versiones Públicas** de los oficios firmados por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.

Considerandos

1.- Que el Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es competente para verificar la clasificación de confidencialidad de la información realizada por la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrita a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, de conformidad con los artículos 64, 65, fracción II, 113, primer párrafo, fracciones I y III de la LFTAIP.

2.- Que en relación a la clasificación de confidencialidad de la información formulada por la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, el artículo 97 de la LFTAIP, dispone a la letra lo siguiente:

“Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

CT/01967/2023

(...)

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley."

3.- Que la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, puso a disposición la siguiente información:

- **Versiones públicas** de los oficios firmados por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.

4.- Los datos confidenciales omitidos en las **versiones públicas** puestas a disposición fueron los consistentes en: **RFC y domicilio de servidores públicos; marca, modelo, número de serie, número de motor y número de placas de vehículos de servidores públicos y de terceros (particulares); nombres y número de identificación de terceros; correo electrónico de personal de empresas, número económico, marca, submarca, tipo, modelo, así como nombre de la institución bancaria y número de cuenta del proveedor**

La clasificación de la confidencialidad de los datos anteriormente señalados es con motivo de que éstos contienen información exclusiva de sus titulares, la cual no puede ser publicada sin su consentimiento previo, pues en caso contrario se vulnerarían datos personales y esfera jurídica de las personas relacionadas con la entrega de la información.

Lo anterior guarda sustento en el Criterio de Interpretación para Sujetos Regulados, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con clave de control PP/001/2023, el cual define la protección de datos personales como un medio para garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa, en los términos siguientes:

***"Protección de datos personales.** Es un derecho humano que tiene estrecha relación con la vida privada. Si bien la protección de datos personales ha sido reconocida en México como un derecho fundamental independiente de la protección a la vida privada y el honor, siguiendo el ejemplo de otros planos regionales y nacionales en la protección de los derechos humanos, no puede interpretarse de manera radicalmente aislada a la protección de la vida privada, sino que se encuentran en estrecha relación, lo que implica la protección de datos personales como un medio para garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa."*

Bajo esa misma premisa, sirve traer a colación la tesis 1a. VII/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro *"Información Confidencial. Límite Al Derecho De Acceso A La Información (Ley Federal De Transparencia Y Acceso a La Información Pública Gubernamental)"*, la cual en la parte medular dispone que en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el derecho de acceso a la información, el cual puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales.

En dicho precepto constitucional sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. De tal suerte que en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada.

CT/01967/2023

En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, se estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general.

Por todo lo expuesto hasta aquí, la clasificación de confidencialidad de la información eliminada tiene fundamento en los artículos 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en lo sucesivo LGPDPPSO); 108, 113, primer párrafo, fracciones I y III, así como el 118 de la LFTAIP, los cuales se transcriben para mayor referencia

LGPDPPO.

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
(...)

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
...”

LFTAIP.

“Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.”

“Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
(...)

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
...”

“Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.”

También resultan aplicables los numerales Segundo, fracción XVIII, Trigésimo Octavo, primer párrafo, fracciones I y II, Cuadragésimo, primer párrafo, fracción I y Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información (en lo sucesivo Lineamientos).

“Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:
(...)

XVIII. Versión pública: El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el

CT/01967/2023

que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.”

“Trigésimo octavo. *Se considera información confidencial:*

- I. *Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*
- II. *La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y*
...”

Cuadragésimo. *En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:*

- I. *La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y*
...”

“Quincuagésimo sexto. *La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.”*

En atención a lo establecido en los preceptos transcritos, la información concerniente a una persona física, que pueda vulnerar o evidenciar su intimidad y patrimonio constituyen datos que están clasificados como confidenciales.

Aunado a ello, la información concerniente a un particular que pueda vulnerar o evidenciar su patrimonio, constituyen datos que están clasificados como confidenciales. De tal suerte que, para el caso que nos ocupa, la información susceptible de clasificarse como confidencial será aquella puesta a disposición por las personas particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Por tanto, considerando un documento con partes o secciones confidenciales, este Instituto, como sujeto obligado, a través de sus Unidades Administrativas, deberá elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Para ello, se entenderá como versión pública al documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.

Bajo esa premisa, el Comité de Transparencia deberá confirmar la confidencialidad de los datos contenidos en la documentación puesta a disposición por el área responsable y aprobar las versiones públicas.

CT/01967/2023

5.- Que el Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es competente para verificar la clasificación de reserva de la información realizada por la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, de conformidad con los artículos 64, 65, fracción II, 110, primer párrafo, fracción V y VII de la LFTAIP.

6.- Que en relación a la clasificación de la reserva de la información formulada por la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, el artículo 97 de la LFTAIP, dispone a la letra lo siguiente:

***“Artículo 97.** La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.
(...)*

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.”

7.- Que la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, argumenta y funda la acreditación de la reserva de la información respecto a número de elementos de seguridad distribuidos en diversos inmuebles del Instituto.

Lo anterior, toda vez que la citada información corresponde a las características del servicio prestado por elementos de seguridad al Instituto, por lo cual el publicar la información requerida supondría la vulneración de la seguridad del personal que labora en los inmuebles del Instituto, así como de los derechohabientes que hacen uso de las instalaciones, exponiendo a posibles actos delictivos, en razón de que personas ajenas pudieran hacer mal uso de ellas ocasionando inclusive la disminución de la reacción de los elementos de seguridad, en el caso de repeler la comisión de un delito.

De tal suerte que la información solicitada vincularía a determinadas personas y con el hecho de divulgarse pondría en riesgo la vida y la seguridad de las personas, así como podría obstaculizar la prevención de los delitos.

Por tanto, la clasificación de reserva de la información referida en párrafos que preceden, tiene fundamento en los artículos 113, primer párrafo, fracciones V y VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); así como el artículo 110, primer párrafo, fracción VII de la LFTAIP, el cual establece lo siguiente:

LGTAIP.

***Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*
(...)

***V.** Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;*
(...)

***VII.** Obstruya la prevención o persecución de los delitos.
...”*

LFTAIP.

***Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información*

CT/01967/2023

reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
(...)

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
(...)

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos.
...”

Por lo anteriormente señalado, los sujetos obligados clasificarán la información en el momento en el cual se reciba una solicitud de acceso a la información. De manera particular, en la LGTAIP, así como en la LFTAIP, se establecen las causales por las cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada información que se encuentre bajo su resguardo.

Ahora bien, la clasificación de la reserva de la información se robustece y sustenta con el numeral Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto, primer párrafo de los Lineamientos, de conformidad con lo siguiente:

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

“Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.”

8.- Por tanto, la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, señaló un periodo de reserva de la información por el término de **1 año**, lo cual se motiva con lo dispuesto por el numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos, el cual se transcribe para pronta referencia:

“Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

- I.** Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;
- II.** Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
- III.** Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;
- IV.** Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
- V.** En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y

CT/01967/2023

- VI.** *Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."*

Al respecto, este Órgano Colegiado, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, considera procedente el período señalado para la reserva referida. De esta manera, se cumple con lo establecido en el artículo 100 de la LFTAIP, el cual señala lo siguiente:

"Artículo 100. *Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un plazo de reserva."*

Por todo lo expuesto hasta aquí, este Órgano Colegiado considera que fue agotado el procedimiento establecido en el artículo 140 de la LFTAIP, mismo que es citado para mayor precisión:

"Artículo 140. *En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:*

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

- I.** *Confirmar la clasificación;*
- II.** *Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y*
- III.** *Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.*

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 135 de la presente Ley."

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 67, primer párrafo, 68 y 69 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de enero de 2023; así como los artículos 3, fracción IX de la LGDPPSO; 113, primer párrafo, fracción VII de la LGTAIP; 64, 65, fracción II, 97, 100, 108, 110, primer párrafo, fracción VII, 113, primer párrafo, fracciones I y III, 118, 133 y 140 de la LFTAIP; y los numerales Segundo, fracción XVIII, Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto, Trigésimo Tercero, Trigésimo Octavo, primer párrafo, fracciones I y II, Cuadragésimo, primer párrafo, fracción I y Quincuagésimo Sexto, de los Lineamientos, este Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emite la siguiente:

Resolución

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de confidencialidad de la información y se aprueban las **versiones públicas** realizadas por la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios**, en términos del considerando 4 de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se confirma la clasificación de reserva de la información realizada por la **DAF**, a través de la **Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación**, adscrito a la **Subdirección de Recursos**

CT/01967/2023



Materiales y Servicios, en términos de lo señalado en el considerando 7 de la presente resolución.

TERCERO.- Se confirma que el periodo de reserva sea por **1 año**, en términos de lo señalado en el considerando 8 de la presente resolución.

CUARTO.- Póngase a disposición de la persona solicitante la información remitida por el área responsable.

QUINTO.- Se hace del conocimiento de la persona solicitante que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146, 147 y 148 de la LFTAIP, podrá interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión en contra de la presente resolución ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o la Unidad de Transparencia del ISSSTE, dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva.

SEXTO .- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta Entidad.

SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE a la persona solicitante mediante la vía elegida por ésta al presentar la solicitud de información pública anexando copia de la presente resolución.

Así lo resolvieron, por unanimidad, los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el 20 de octubre de 2023.

Laura Luisa Dorantes Sánchez

Titular de la Unidad de Transparencia
y Presidenta del Comité de Transparencia

Edgar Darío Ordoñez Hernández

Firma en suplencia del Titular del Órgano
Interno de Control, designado mediante
acuerdo del Comité de Transparencia
ACT/06/2022 de fecha 31 de mayo de 2022

Carlos Alberto Islas González

Coordinador de Archivos,

AERP/LECP

CT/01967/2023